

Supuestos criminalizados de caza o pesca en el marco de los delitos medioambientales contra la fauna

Diego Celma Herrando

Director del Trabajo de Fin de Grado: Asier Urruela Mora

ÍNDICE

LISTADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS	3
- I. INTRODUCCIÓN	4
○ 1. LA PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD POR CAUSA HUMANA DIRECTA	4
○ 2. LA NECESIDAD DE UNA NORMATIVA EFICAZ CONTRA LA CAZA FURTIVA	6
○ 3. METODOLOGÍA, ENFOQUE Y OBJETIVOS	7
▪ 3.1 Metodología	7
▪ 3.2 Enfoque	8
▪ 3.3 Objetivos	8
- II. DESARROLLO	9
○ 1. LEGISLACIÓN VIGENTE	9
▪ 1.1 Antecedentes normativos	9
▪ 1.2 Tipos penales: análisis pormenorizado	11
• A) Artículo 334	11
• B) Artículo 335	14
▪ 1.3 Problemática de las «leyes penales en blanco»	16
▪ 1.4 Calificación de especie protegida: origen en normas de máximo rango legal	17
▪ 1.5 Reformas de los artículos 334 y 335 del Código Penal	18
• A) Artículo 334	18
○ a) Redacción original del artículo 334 en 1995	18
○ b) Redacción del artículo 334 tras reforma de 2003	18
○ c) Redacción del artículo 334 tras reforma de 2010	19
○ d) Redacción del artículo 334 tras reforma de 2015	20
○ e) Redacción actual del artículo 334 tras reforma de 2023	21
• B) Artículo 335	22
○ a) Redacción original del artículo 335 en 1995	23
○ b) Redacción del artículo 335 tras reforma de 2003	24
○ c) Redacción del artículo 335 tras reforma de 2015	24
○ d) Redacción actual del artículo 335 tras reforma de 2023	25
○ 2. DOLO, IMPRUDENCIA Y OTROS SUPUESTOS CONTEMPLADOS	27
▪ 2.1 Error de tipo y error de prohibición	27
▪ 2.2 Imprudencia grave del 334.3	29
▪ 2.3 Impunidad en casos de estado de necesidad	30
▪ 2.4 Miedo insuperable	30
▪ 2.5 Falta de medios para perseguir al furtivo y penas poco disuasorias	31
○ 3. JURISPRUDENCIA, REPARACIÓN DEL DAÑO E INTERVENCIÓN MÍNIMA	32
▪ 3.1 Jurisprudencia relacionada	32
▪ 3.2 Reparación del daño	34
▪ 3.3 Deslinde entre tipos penales e ilícitos administrativos	36
- III. CONCLUSIONES	38
- BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DOCUMENTALES	41

LISTADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

ADN	Ácido desoxirribonucleico
Art.	Artículo
BOE	Boletín Oficial del Estado
Cap.	Capítulo
<i>Cit.</i>	<i>Opus citatum</i>
Coord.	Coordinación
CP	Código Penal
€	Euro (divisa)
Núm.	Número
P.	Página
Pp.	Páginas
<i>PhDr.</i>	Doctor en Filosofía
Rec.	Recurso
Ss.	Siguientes
TFG	Trabajo de Fin de Grado
TS	Tribunal Supremo
UE	Unión Europea
Univ.	Universidad
<i>V.g.</i>	<i>Verbi gratia</i>
VOL.	Volumen

I. INTRODUCCIÓN

1. LA PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD POR CAUSA HUMANA DIRECTA

En los albores de la civilización, la Humanidad subsistió por medio de la caza y de la pesca. Al no existir un concepto de ganadería antes del Neolítico, la actividad cinegética y la captura de pescado mediante métodos rudimentarios fueron prácticas inherentes al ser humano que le proveyeron de sustento y le ilustraron en el manejo de las armas y de otras herramientas.

En primer lugar, se torna necesario diferenciar entre la caza y la pesca deportiva, por un lado, y la pesca industrial, por el otro. De la pesca industrial solo es preciso subrayar que también se lleva a cabo en extensiones de agua acotadas como piscifactorías o en el medio natural (en donde produce daños colaterales en especies protegidas, e incluso en especies en peligro crítico de extinción como en el caso de las 10 o 12 *Phocoena sinus*¹ que todavía resisten en el Golfo de Baja California). Como dice el biólogo Carlos Pedrós-Alió, la pesca actual es el equivalente a la caza de nuestros antepasados, y nos arriesgamos a una extinción en masa como la del Cuaternario, que ya causamos en tiempos prehistóricos y que afectó a gran parte de la megafauna. Por ello, con respecto a esa problemática en particular, es necesario promover una transición de la pesca en alta mar a la acuicultura².

En la actualidad, la cinegética y la pesca deportiva, aunque también se transforman en un nada desdeñable aporte calórico, tienen el ocio como motivo principal en Occidente. En un estado de bienestar, todos los ciudadanos tenemos acceso a alimentos cárnicos y a pescado fresco de forma económica y, sobre todo, cómoda.

Sin embargo, estas actividades se utilizan asimismo para controlar ciertas especies como el jabalí, el conejo o el siluro³, en cacerías alentadas por los gobiernos autonómicos o incluso haciendo uso de medios propios de los consistorios de los términos municipales afectados. Y es que los cazadores son una pieza fundamental para conservar la

¹ Dine FINE MARRÓN. «Al rescate de la totoaba, el pez con la vejiga más valiosa del mundo», (National Geographic, 2022).

² PEDRÓS-ALIÓ, C. «Bajo la piel del océano», (Plataforma Editorial, Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), 2017).

³ LIFE INVAS AQUA «Castilla y León permitirá once artes de pesca para reducir el siluro en Burgos y Soria», (2019).

biodiversidad según la UICN⁴. Bouchner lo resumió muy bien en la frase siguiente: «la misión de la cinegética consiste en velar por las condiciones de vida de los animales salvajes [...], protegerlos y controlar su caza. Su tarea, de orden económico y cultural, defiende los intereses de toda la sociedad»⁵.

En todo caso, la caza está regulada en nuestro país, y hay unos límites territoriales, temporales, y una serie de especies vetadas de caza, por su importancia, reducido número u otros motivos. Y, como dice Fernando Tello del Hoyo, presidente de la Federación Aragonesa de Caza desde 2004 hasta 2021, «hay que cazar lo que está permitido y si el cazador no reconoce a una especie, porque está fuera de su hábitat y desubicada, hay que dejar tranquilo al ejemplar en cuestión»⁶, en relación con el ibis calvo (*Geronticus calvus*) que fue abatido en enero de 2024 en Alcorisa⁷.

No siempre ha sido así; en tiempos pretéritos de la Hispania romana, la caza era considerada *res nullius*, y no había control alguno por parte del Estado. Esto provocó que se diezmaran e incluso desaparecieran muchas especies que jamás habrán sido siquiera catalogadas en vademécums de biología. Mas tarde, durante la época medieval, la cinegética se limitó bastante, pero no con ánimo de proteger a las especies, sino como una prerrogativa hacia los señores feudales, propietarios de bosques y montes, que podían cazar sin límite dentro de sus dominios, en los cuales abundaban los animales de caza⁸.

En la actualidad, el objetivo de la limitación y del control es bien distinto, y cuando un cazador (o pescador⁹) captura o da muerte a algún ejemplar de ciertas especies protegidas o en peligro de extinción, ya se trate de especies autóctonas o migratorias, se convierte en un hecho luctuoso que nuestra legislación persigue y condena si ha mediado dolo, e incluso, en algunos casos, por imprudencia.

⁴ Entrevista con Alfonso CALVO, director general del Medio Natural. Gobierno de Aragón (2023-actualidad), 9-4-24.

⁵ Miroslav BOUCHNER, «*Animales de caza*», (Aventium, Praha, 1988).

⁶ Entrevista con Fernando TELLO, presidente de la Federación Aragonesa de Caza, (2004-2021), 10-4-24.

⁷ Iulia MARINESCU «*Matan a tiros en Alcorisa un ibis calvo, ave en grave peligro de extinción*», (La Comarca, 2024).

⁸ Salvador GRAU FERNÁNDEZ, «*El actual derecho de caza en España*», núm. 85, (Revista de Estudios Agrosociales, 1973).

⁹ EL DÍA. C.A.C. «*Arrestado en Canarias por pescar y despedazar un angelote*», (El Día, La Opinión de Tenerife, 2023).

A este punto hemos llegado tras siglos de evolución, de avances en concienciación medioambiental y de aplicación de medidas coercitivas por parte de los gobiernos, legisladores y jueces.

El Código Penal del año 1995 refleja la importancia de este tipo de delitos contra la fauna dedicándole varios artículos en el Capítulo IV del Título XVI. El objetivo de estas normas no es otro que el de «proteger la biodiversidad y mantener el equilibrio del ecosistema» (*ex* sentencia de la Audiencia Provincial de Illes Balears de 30 de diciembre de 2002)¹⁰.

Durante el Holoceno han desaparecido miles de especies, y como dijo el silvicultor y pensador Aldo Leopold, «si la naturaleza ha evolucionado en esta dirección y estas especies han sobrevivido, ¿quién somos nosotros para decidir que una especie es prescindible?»¹¹.

2. LA NECESIDAD DE UNA NORMATIVA EFICAZ CONTRA LA CAZA FURTIVA

A la hora de delimitar la cuestión tratada en este Trabajo de Fin de Grado, la gran pregunta que surge es si las medidas implementadas hasta la fecha están sirviendo para minorar la caza prohibida. En otras palabras, si esos artículos del Código Penal logran transmitir ese afán disuasorio y no se quedan en un mero desiderátum sin aplicación práctica en la jurisdicción española. Además, la pregunta subyacente es si esas normas son efectivas a la hora de permitir que dichas especies, ya de por sí muy castigadas por la pérdida de sus hábitats naturales o por la caza indiscriminada en tiempos pretéritos, vayan recuperando sus poblaciones.

El objetivo del legislador parece ser el de otorgarles un plus de protección a todas esas especies que han sufrido una persecución durante años por el valor de sus plumas, por sus pieles o por su cornamenta, por poner algunos ejemplos.

Este tipo de caza de especies protegidas o en peligro de extinción no tiene como fin el alimento, y por ese motivo es comprensible que esté despenalizada en casos de fuerza mayor o estado de necesidad. Por ejemplo, cuando una persona se extravía en la montaña o en el bosque y debe recurrir a la caza para sobrevivir.

¹⁰ Jaime DORESTE HERNÁNDEZ. «Los delitos contra el medio ambiente. Guía práctica», (Ecologistas en Acción, España, 2022).

¹¹ Aldo LEOPOLD. «*Round River: From the Journals of Aldo Leopold*», (Oxford University Press, Oxford, 1993).

3. METODOLOGÍA, ENFOQUE Y OBJETIVOS

3.1 Metodología

La metodología va a seguir cuatro caminos interrelacionados.

- El primero se focaliza en el análisis de la legislación vigente, estudiando la regulación positiva recogida en los tipos de referencia y, a su vez, valorando las remisiones a leyes administrativas de protección ambiental o de caza. Se trata de comprobar en qué grado afecta la problemática de las «leyes en blanco», que tanta indeterminación genera en un ámbito tan garantista como el Derecho Penal.
- En segundo lugar, el estudio doctrinal ofrece una visión general de los cambios que se han ido produciendo a lo largo de las sucesivas reformas al capítulo IV del Título XVI (véase 2003, 2010, 2015 y 2023). Es evidente que la normativa ha experimentado un desarrollo, alentado sin duda por la tendencia global y, en especial, por el marco regulatorio de la Unión Europea, de proteger la biodiversidad en pos de asegurar un futuro para la Humanidad. Además, en la determinación del concepto «medioambiente», se ha evolucionado desde una arcaica visión antropocéntrica, a una visión expansiva. Ya vaticinaba Robert Kaplan en 1994 que, en el siglo XXI, el medioambiente sería un asunto de importancia capital para la Seguridad Nacional, por ser un desafío y futura fuente de conflictos¹². Analizar esa pauta de cambio es fundamental para dilucidar el punto en el que nos encontramos en 2024.
- En tercer lugar, mediante entrevistas personales a expertos del sector de la caza y del medio natural, se trata de extraer información genuina (no reflejada en los libros y manuales académicos), acerca de la situación real y del parecer de los actores involucrados.
- Por último, será muy interesante comprobar cómo los Juzgados de lo Penal españoles han venido aplicando dicha legislación en las sentencias emitidas durante los últimos 25 años, atendiendo a sus razonamientos y a su forma de llegar a un veredicto justo y proporcional al delito cometido.

¹² Javier FEAL VÁZQUEZ. «Biodiversidad», Boletín de Información, núm. 279, (Ministerio de Defensa, 2003).

3.2 Enfoque

Se ha optado por un enfoque teórico, incorporando sobre legislación, jurisprudencia y datos acerca de diversas especies afectadas por la caza y pesca, con ánimo de comprobar las hipótesis y cuestiones que justifican este Trabajo de Fin de Grado. ¿Las penas están consiguiendo disuadir a los furtivos en su empeño? Y más importante todavía, ¿las medidas aplicadas están permitiendo una recuperación de las especies en peligro? Son algunas de las preguntas básicas a las que este TFG tratará de dar respuesta a lo largo del desarrollo y, especialmente, en el apartado de conclusiones.

3.3 Objetivos

Los objetivos de este TFG son ofrecer un análisis pormenorizado de la evolución de la legislación penal medioambiental, campo secundario dentro de la legislación penal, pero con gran relevancia social en los últimos lustros.

Además, la efectividad de este tipo de medidas debe comprobarse en un plazo más o menos extenso, tratando de determinar si las normativas han cumplido con su objetivo disuasorio. Tras casi tres décadas de vigencia del Código Penal, ya se dispone de una perspectiva amplia, suficiente, asentada y adecuada para valorar si dicha legislación ha sido efectiva.

Por último, sería muy interesante poder fomentar un incremento de las penas, ya sean de multa o de prisión, en los tipos de referencia destinados a la protección de la fauna, si se comprobará que no se está consiguiendo reducir la caza furtiva, o incluso reflexionar acerca de la creación de otros sistemas de trazabilidad que permitan identificar al autor de dicho delito contra una especie protegida.

II. DESARROLLO

1. LEGISLACIÓN VIGENTE

1.1 Antecedentes normativos

En la España de mediados del siglo XX, la legislación medioambiental se resumía básicamente a cuatro cuerpos normativos: la Ley de Montes, la Ley de Aguas, la Ley de Caza y la Ley de Pesca¹³. En aquellos años, en los que había poca concienciación medioambiental, todos los proyectos conservacionistas dispusieron de pocos medios a su alcance y el avance fue precario. Por desgracia, el legislador reaccionó demasiado tarde para especies como el bucardo, al que perdimos para siempre¹⁴ con el cambio de milenio.

En la década de los setenta, todavía en plena dictadura franquista, se produjeron avances en conservación. Por ejemplo, determinadas conductas como cazar por la noche haciendo uso de luces artificiales o el empleo de armas largas rayadas en zona de seguridad, ya eran constitutivas de un delito especial tipificado en los artículos 42 y 43 de la Ley de caza 1/70 de 4 de abril, castigado con arresto mayor o multa de 5.000 a 50.000 pesetas y la privación de la licencia de caza de 2 a 5 años. Si esas acciones eran calificadas solo como faltas, se castigaban con pena de arresto menor o multa de 250 a 5.000 pesetas (ejemplos: cazar desde un automóvil o con condiciones meteorológicas de visibilidad reducida). En cambio, hoy en día, se las considera meras infracciones administrativas en la Ley de Caza de Aragón (la Ley de caza 1/70 de 4 de abril estuvo vigente en Aragón hasta 1993, cuando entró en vigor la Ley 12/1992). Lo mismo ocurría con la pesca, cuya Ley de 20 de febrero de 1942 regulaba en su art. 20 numerosos delitos que hoy en día son simples infracciones administrativas.¹⁵

Uno de los convenios que es necesario mencionar es el CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). Se trata de un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos de 184 países que tiene como objetivo un comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres que

¹³ Entrevista con Arturo NOTIVOLI, capitán jefe del SEPRONA de la provincia de Huesca (2003-2017) 21-3-24.

¹⁴ A expensas de que se retome algún día el proyecto de clonación de Fernández-Arias que derivó en un embarazo que llegó a término y que dio lugar un ejemplar vivo, aunque no viable, en el 2003.

¹⁵ Entrevista con Arturo NOTIVOLI... *cit.*

no constituya una amenaza para la supervivencia de las especies¹⁶. Este tratado fue redactado basándose en la resolución adoptada en 1973 por los miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres supuso un cambio de paradigma en España y se dio un paso más hacia la protección de las especies al «introducir una perspectiva integral» y aplicar «el Derecho de conservación de la naturaleza internacionalmente homologable», en consonancia con los convenios firmados contra el tráfico internacional de especies amenazadas o especies migratorias «a instancias del Consejo de Europa», y también debido a la «recepción del acervo comunitario con motivo de la entrada de España en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986»¹⁷. En aquel marco temporal, conviene subrayar que España fue un país pionero al crear el Servicio de Protección de la Naturaleza en 1988, instrumento básico y necesario para vigilar el cumplimiento de las leyes que iban a implementarse en los años venideros.

En una fecha posterior a la elaboración de Código Penal de 1995, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad sustituyó a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. La nueva normativa recogía en sus anexos un inventario de especies que merecían especial protección, y que, todavía hoy, es objeto de remisión desde el Código Penal a la hora de tipificar una conducta como delito.

A la hora de legislar dichas normativas, las comisiones especializadas de las cámaras parlamentarias, tanto las autonómicas como el Congreso y el Senado, solicitan información a los organismos especializados pertinentes¹⁸. Por ejemplo, los tipos penales 334 y 335 que se analizan en este TFG han sido elaborados con la colaboración y el asesoramiento de este tipo de departamentos técnicos. Otra fuente de retroalimentación son las preguntas parlamentarias, que se realizan con frecuencia, tanto en los plenos como en las sesiones semanales de las comisiones sectoriales relacionadas con el medioambiente. Finalmente, siguiendo la jerarquía normativa, en las órdenes de pesca fluvial, el presidente autonómico delega en el consejero competente, que, a su vez,

¹⁶ Cites.org. Consulta realizada el 29-03-24.

¹⁷ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

¹⁸ Entrevista con Alfonso CALVO, director General del Medio Natural. Gobierno de Aragón, (2023-actualidad), 9-4-24.

encarga una versión preliminar de dicho documento de carácter legal al Servicio de Caza y Pesca¹⁹.

1.2 Tipos penales: análisis pormenorizado

A finales del siglo XX es cuando el medioambiente, como concepto general -y en particular la materia sobre la que versa este trabajo, la fauna- han elevado su estatus para convertirse en bienes objeto de tutela penal. El bien jurídico «fauna», incluyendo tanto especies protegidas como amenazadas, ha experimentado una diáspora normativa con sucesivas reformas que se analiza en profundidad a continuación.

Los artículos 334 y 335 de nuestro Código Penal vigente son los que recogen los supuestos criminalizados que afectan a la fauna como uno de los dos «factores bióticos»²⁰ que componen el medioambiente.

A) Artículo 334

El artículo 334 dice así:

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general:

- a) cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre;
- b) trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas; o,
- c) realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración.

La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, destruya o altere gravemente su hábitat.

2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción.

3. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de tres meses a dos años.

¹⁹ Entrevista con Alberto FERNÁNDEZ-ARIAS, jefe del Servicio de Caza, Pesca y Medio Acuático. Gobierno de Aragón, (2012-actualidad), 12-04-24.

²⁰ Francisco MUÑOZ CONDE. «Derecho Penal Parte Especial», 24ª edición, Puesta al día con la colaboración de Carmen López Peregrín, (Tirant Lo Blanch, Valencia, 2022).

4. Se impondrá la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de entre dos a cuatro años, cuando los hechos relativos a los apartados a) y c) del apartado 1 se hubieran cometido utilizando armas, en actividades relacionadas o no con la caza.

En dicho artículo se preservan, por lo tanto, las especies en régimen de protección especial, y las amenazadas (vulnerables, en peligro y en peligro crítico de extinción)²¹, ante la caza, la pesca o la mera intención destructiva (334.1.a), tanto de la especie como de su hábitat. También se persiguen las actividades distintas de las anteriores que impidan la reproducción o la migración, elementos fundamentales para la supervivencia de dichas especies (334.1.b).

Por otro lado, también entra dentro del tipo objetivo la mera adquisición y posesión de especies protegidas, así como el tráfico de especies, sus partes o derivados (334.1.c).

A esa terna de comportamientos se le aplica el tipo básico cuando afecta a especies protegidas (remisión a ley administrativa), mientras que se aplica el tipo cualificado cuando estas actividades delictivas se han llevado a cabo en concreto contra especies en peligro de extinción (334.2) aplicando la pena en su mitad superior.

En relación con esa remisión es importante mencionar que, en la reforma llevada a cabo en el año 2015, la categoría de especies que cabían en el tipo objetivo pasó de ser «especies amenazadas» a «especies protegidas», una categoría mucho más extensa que ha venido obligando a los jueces a realizar una interpretación restrictiva para no quebrantar el principio de intervención mínima. Estamos ante una «ley penal en blanco», pero el núcleo de la antijuridicidad ya viene desarrollado en la legislación penal²².

Nótese, además, que a diferencia de lo que sucede en los delitos contra la flora (art. 332), en el 334 no exime al infractor el hecho de «que la conducta afecte a una cantidad insignificante de ejemplares y no tenga consecuencias relevantes para el estado de conservación de la especie». Bastará para que sea delito la caza o pesca de un único ejemplar de especie protegida o en peligro de extinción²³.

Es necesario apuntar, además, que estamos ante un artículo que aglutina tanto conductas de resultado como de mera actividad. Por ejemplo, se cumple el tipo objetivo si

²¹ Escala de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) Organización Internacional.

²² Joan QUERALT JÍMENEZ. «*Derecho Penal español, parte especial*», Cap.27, 7ª edición, (Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015).

²³ Elena MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, «*Lecciones de Derecho Penal Parte Especial*», 2ª edición, (Tirant Lo Blanch, Valencia, 2021).

simplemente se les impide reproducirse, aun cuando no se haya producido la muerte del animal, o, por ejemplo, con la mera tenencia de la especie, incluso aunque el ejemplar haya sido hallado muerto por causas naturales o haya fallecido a causa de un accidente de automóvil²⁴.

En lo relativo a las formas de ejecución, en los delitos de resultado v.g.: capturar un angelote (*Squatina squatina*) o una foca monje (*Monachus monachus*), pueden darse la tentativa acabada o inacabada, y la consumación; mientras que en los de actividad (como dificultar la migración) son posibles la consumación y la tentativa inacabada, a pesar de que esta última apreciación es muy inusual por parte de los jueces en nuestro ordenamiento jurídico²⁵. Sin embargo, por poner un ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2001 condenó a un criador ilegal de halcones peregrinos, aunque todavía no había comenzado a traficar con ellos cuando fue sorprendido por las fuerzas del orden²⁶. A pesar de que la doctrina mayoritaria se ha posicionado en pos de excluir la tentativa en delitos de actividad, e incluso «suele afirmarse que en los delitos de mera actividad no cabe la tentativa; en realidad, sí es posible, pero resulta muy difícil distinguir el comienzo del tipo, o intento, de la realización completa»²⁷. Así pues, encontramos sentencias como la mencionada *supra*, en la que se ha admitido jurisprudencialmente la tentativa.

También resulta interesante mencionar que, a efectos penales, «es un factor irrelevante que la especie amenazada haya nacido en libertad o en cautividad» (*ex* sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8 de abril de 2002)²⁸.

En cuanto al tipo subjetivo, tras estos dos primeros puntos del artículo, que cubren las acciones dolosas, hay un tercer punto que abarca la modalidad imprudente, aunque limitándolo a la imprudencia grave para garantizar ese principio, mencionado líneas arriba, de mínima intervención, que es esencial en el Derecho Penal.

²⁴ Esteban MESTRE DELGADO, Tema 16 «Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente», Carmen LAMARCA PÉREZ. (Coord.) «*Derecho Penal Parte Especial*», 4ª edición, (COLEX, Madrid, 2008).

²⁵ Esteban MESTRE DELGADO, Tema 16 «Delitos relativos a la ordenación... *cit.*

²⁶ María del Carmen GÓMEZ RIVERO. «*Fundamentos de Derecho Penal. Parte Especial*», VOL. I, (Tecnos, Madrid, 2022).

²⁷ UNIV. DE NAVARRA, «Tentativa, consumación y agotamiento del delito», (v-4-2017), núm. 41, (2017) <<https://www.unav.edu/web/delictum/lecciones/notas-tecnicas>> Acceso 10-05-24.

²⁸ Jaime DORESTE HERNÁNDEZ. «Los delitos contra el medio ambiente. Guía práctica», (Ecologistas en Acción, España, 2022).

B) Artículo 335

El artículo 335 dice así:

1. El que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, será castigado con la pena de multa de ocho a doce meses, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años y privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo.
2. El que cace o pesque o realice actividades de marisqueo relevantes sobre especies distintas de las indicadas en el artículo anterior en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular o sometidos a concesión o autorización marisquera o acuícola sin el debido título administrativo habilitante, será castigado con la pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar, pescar o realizar actividades de marisqueo por tiempo de uno a tres años y privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo, además de las penas que pudieran corresponderle, en su caso, por la comisión del delito previsto en el apartado 1 de este artículo.
3. Si las conductas anteriores produjeran graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido a régimen cinegético especial o a la sostenibilidad de los recursos en zonas de concesión o autorización marisquera o acuícola, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de cazar, pescar, y realizar actividades de marisqueo por tiempo de dos a cinco años y privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo.

Este segundo precepto de protección de la fauna tiene una intención muy clara por parte del legislador. Bien es sabido que las especies que hoy gozan de colonias numerosas podrían decaer de forma repentina, como ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia por culpa de la destrucción de su hábitat y del ecosistema, la fragmentación excesiva de sus poblaciones y, por supuesto, por la pesca de arrastre o la caza incontrolada.

Este artículo se centra en esas especies «no protegidas» (la inmensa mayoría) pero, únicamente, cuando hay normas específicas de caza o pesca que prohíban su captura expresamente, por el motivo que sea (335.1). Esto quiere decir que quedan fuera del Derecho Penal la caza de especies permitidas, aunque no estemos en la temporada indicada o sobrepasando los límites de captura, aunque estos actos puedan ser susceptibles de su correspondiente sanción en el ámbito administrativo. La sentencia del 3 de noviembre 2020 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo²⁹ resuelve en recurso

²⁹ Carmen ALASTUEY DOBÓN. «Delitos relativos a la ordenación del territorio», ROMEO CASABONA, SOLA RECHE, BOLDOVA PASAMAR (Coord.), *«Derecho Penal español, parte especial»*, 2ª edición, (Editorial Comares, Granada, 2022).

de casación un caso sobre una cacería de muflones y ciervos, que estaba afectada por la prohibición impuesta por Consejería de medioambiente y Ordenación del Territorio (Orden de 1 de julio de 2016) en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dichos límites están autorizados, con carácter general, por el art. 62.3.d de la Ley 42/2007, según el cual «se podrán establecer moratorias temporales o prohibiciones especiales cuando razones de orden biológico o sanitario lo aconsejen»³⁰.

A pesar de que el tenor literal del art. 335 no deja lugar a mucha interpretación, en ese caso la Sala entendió que no todo incumplimiento de una prohibición administrativa de caza puede ser calificado como delito: «este precepto no puede ser degradado a la condición de delito puramente formal de desobediencia a la normativa administrativa. Lo prohíbe el principio de intervención mínima». En demasiadas ocasiones, la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que es muy difícil establecer las exigencias adicionales que permiten afirmar que hay un injusto penal, más allá del incumplimiento de la normativa administrativa sectorial. En el punto 3.3 del desarrollo se explica más en detalle la problemática de deslinde entre los ilícitos administrativos y los delitos.

También se aplica el 335 cuando el cazador o pescador no dispone de un título habilitante o carece de concesión administrativa (autorización) en terrenos públicos o en cotos ajenos (queda fuera del tipo si acontece dentro de una finca propiedad del autor) (335.2). Este párrafo complementa al 335.1 y no excluye la imposición de sus correspondientes penas. El tipo cualificado 335.3 se aplica «si se producen graves daños al patrimonio cinegético»

Para este artículo 335 no cabe el delito por imprudencia, y, en consecuencia, hay atipicidad cuando concurre un error de tipo. Por otro lado, también se admite el estado de necesidad como alegación en defensa de una captura furtiva³¹.

A ambos artículos (334 y 335) se le impone la pena superior en grado cuando entran en concurso con el art. 338 del Código Penal, que dice así:

Cuando las conductas definidas en este Título afecten a algún espacio natural protegido, se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas

³⁰ Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

³¹ Joan QUERALT JÍMENEZ. «*Derecho Penal español, parte especial*», Cap.27, 7ª edición, (Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015).

En lo relativo al sujeto activo, cualquiera puede ser el responsable de cometer estos delitos, y el sujeto pasivo es toda la ciudadanía, que se ve afectada por la pérdida de la biodiversidad y de la riqueza natural.

1.3 Problemática de las «leyes penales en blanco»

Por norma general, las leyes penales constan de un supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica, y la mayoría de los artículos que figuran en el Código Penal suelen contener ambos elementos; pero el CP también contiene tipos incompletos en donde no está descrito de un modo total el supuesto de hecho; son las denominadas «leyes penales en blanco», que remiten a otra legislación no penal e incluso a normativa reglamentaria. En la Exposición de motivos del Código Penal de 1995 ya avisa el legislador de que «se ha optado por remitir a las correspondientes leyes especiales, la regulación penal de las respectivas materias».

En el artículo 334, con pena privativa de libertad, y cuya modificación requiere la promulgación de una ley orgánica, las especies protegidas a las que se hace referencia se establecen mediante remisiones a leyes no penales.

Ciertos sectores de la doctrina consideran que esta vía indirecta por la que se describe un comportamiento delictivo mediante leyes ordinarias o reglamentos es inconstitucional, pero, por otro lado, la doctrina mayoritaria entiende que las «leyes penales en blanco» son constitucionales si se cumplen determinadas premisas, como que dicha norma penal incompleta contenga el núcleo esencial de la conducta prohibida y que la remisión quede reservada a aspectos secundarios del acto penado.

En el tipo cualificado del 334, que protege a especies en peligro de extinción, es preciso acudir a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y que dicha especie figure en la taxonomía pertinente, *ex art.* 58.1 de dicha norma³².

El 335.1 fue modificado en el año 2003 porque la redacción original dejaba mucho margen a la interpretación, provocando indefensión, y, desde entonces, se exige para que se cumpla el tipo objetivo que la caza de dicha especie se halle especialmente prohibida, frente al formato anterior, que castigaba cazar o pescar aquello que no estaba

³² María del Carmen GÓMEZ RIVERO, «Fundamentos de Derecho Penal. Parte Especial», VOL. I, (Tecnos, Madrid, 2022).

expresamente autorizado, lo cual hacía que las normas administrativas definieran el tipo delictivo por completo, en lugar de complementarlo, generando muchas dudas acerca de su constitucionalidad.

En cualquier caso, ha sido objeto de debate el hecho de que el injusto se vea fijado a partir de una taxonomía que figura en leyes o reglamentos, en los cuales se recogen las especies a las que el legislador ha decidido prestar mayor atención, abogando por la conservación de las mismas mediante una protección especial. Esto puede provocar una indefensión por parte del cazador, ya que es imposible conocer todos esos listados de especies. Además, hay especies que, en función de la región de referencia, constituyen una especie cinegética o son, por el contrario, una especie protegida. Por poner un ejemplo muy evidente, hasta 2021, el lobo ibérico (*Canus lupus signatus*) fue una especie cinegética al norte del río Duero, estando al mismo tiempo protegida al sur de dicha cuenca)³³. Además, las leyes de caza están transferidas a las autonomías y eso hace aún más complicado conocer toda la regulación en profundidad.

1.4 Calificación de especie protegida: origen en normas de máximo rango legal

Las especies protegidas configuran una lista volátil que está en constante revisión. Algunas especies entran en la lista porque sus cifras están en retroceso, mientras que otras salen de la misma (las menos) porque su especie se ha recuperado. Uno de esos verdaderos milagros es la recuperación del Elefante Marino del Norte (*Mirounga angustirostris*), en México, que llegó a contar con una única población de 20 ejemplares en 1911, tras ser declarado extinto previamente hasta en tres ocasiones, y que hoy en día supera los 150.000 individuos³⁴.

Las listas de especies protegidas, aunque se ven concretadas por leyes estatales y autonómicas, derivan de Convenios Internacionales como el Convenio de Washington (1973) o Reglamentos de la Unión Europea (338/97 del Consejo de la UE). Por supuesto, también aparecen en documentos oficiales como el CITES (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) que hemos mencionado *supra*.

En España se regulan a través de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, que desarrolla

³³ «El lobo ya no es una especie cinegética en España», (Diario del Alto Aragón, 2021).

³⁴ Rus HOELZEL, «Genomics of post-bottleneck recovery in the northern elephant seal», (University of Durham U.K., 2024).

el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Este decreto se actualiza mediante órdenes ministeriales y cuenta actualmente con 974 taxones, de los cuales 345 están en la categoría de especies amenazadas. En Aragón, el Decreto 129/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón dio origen al Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y a nuestro propio Catálogo de Especies Amenazadas.

1.5 Reformas de los artículos 334 y 335 del Código Penal

No hay en el Código Penal información relativa a la inclusión de la legislación penal medioambiental en el ordenamiento jurídico español, que hasta entonces no existía en términos de delito. Previamente, se regulaban este tipo de acciones con sanciones administrativas. La *ratio legis* fue la conservación y el mantenimiento de las especies autóctonas³⁵, y esta razón no solo abarca a los artículos de los que este trabajo se ocupa, sino que incluye también otros delitos como los que atañen a la destrucción de la flora.

A) Artículo 334

a) Redacción original del artículo 334 en 1995

1. El que cace o pesque especies amenazadas, realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración, contraviniendo las Leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de fauna silvestre, comercie o trafique con ellas o con sus restos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses.

2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción.

En esta primera redacción, la original de 1995, únicamente hay que destacar que ya puede apreciarse esa remisión mencionada anteriormente en los puntos 1.3 y 1.4 a las leyes especiales sobre protección de especies de fauna silvestre.

b) Redacción del artículo 334 tras la reforma de 2003

La reforma se promulgó a través de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (las nuevas inclusiones y cambios relevantes del tipo aparecen en cursiva),

³⁵ Juan Antonio MARTOS NÚÑEZ. J.A. «Lección 18ª», en Miguel POLAINO NAVARRETE, «*Lecciones de Derecho Penal parte especial*», Tomo 1, 2ª edición, (Tecnos, Madrid, 2019).

1.El que cace o pesque especies amenazadas, realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de fauna silvestre, comercie o trafique con ellas o con sus restos será castigado con la pena de prisión de *cuatro meses* a dos años o multa de ocho a 24 meses y, *en todo caso, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años.*

2.La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción.

En la Exposición de motivos de dicha ley (III)³⁶ se argumenta en el párrafo g) que «se realizan determinadas modificaciones en los tipos delictivos que afectan al medioambiente, bienes jurídicos especialmente protegidos y objeto de una creciente preocupación social».

Ya se incluye la posibilidad de inhabilitar al autor para el ejercicio de cazar y pescar por un periodo de dos a cuatro años.

c) Redacción del artículo 334 tras la reforma de 2010

Reforma legislada en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

1. El que cace o pesque especies amenazadas, realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración, o *destruya o altere gravemente su hábitat*, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de fauna silvestre, o comercie o trafique con ellas o con sus restos, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en cualquier caso, *la de inhabilitación especial para profesión u oficio e* inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años.

2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción.

En el preámbulo (XXI) se explica que las modificaciones en los delitos contra el medioambiente responden a la necesidad de una armonización normativa con la Unión Europea en este ámbito. De conformidad con las obligaciones asumidas, se produce una agravación de las penas y se incorporan a la legislación penal española los supuestos previstos en la Directiva 2008/99/CE de 19 de noviembre, relativa a la protección del medioambiente mediante el Derecho Penal.

³⁶ Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Uno de los fines de dicha normativa es «lograr una protección eficaz del medioambiente», añadiendo que es «necesario aplicar sanciones más disuasorias a las actividades perjudiciales para el medioambiente, es decir, que causan o pueden causar daños sustanciales al aire, incluida la estratosfera, al suelo, a las aguas, a los animales o a las plantas, incluida la conservación de las especies»³⁷. Por ese motivo, esta modificación del año 2010 transpuso la protección del hábitat.

Por otro lado, es importante recalcar que, en el mencionado documento de carácter europeo, se hace una remisión genérica a qué especies son las consideradas protegidas, y qué hábitats deben tener esa catalogación de zona de protección especial.

Artículo 2 Directiva 2008/99/CE de 19 de noviembre

b) «especies protegidas de fauna y flora silvestres»:

i) a los efectos del artículo 3, letra f), las recogidas en:

- el anexo IV de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (3), y

- el anexo I, al que se hace referencia en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (4),

c) «hábitat dentro de un área protegida»: todo hábitat de especies en una zona clasificada como zona de protección especial de conformidad con el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 79/409/CEE, o todo hábitat natural o un hábitat de especies en una zona clasificada como zona de protección especial de conformidad con el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 92/43/CEE;

d) Redacción del artículo 334 tras la reforma del 2015

Entró en vigor con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modificaba la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

1. Será castigado con la pena de prisión de *seis meses* a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general:

a) cace, pesque, *adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre*;

b) trafique con ellas, sus partes *o derivados de las mismas*; o,

³⁷ Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal.

c) realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración.

La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, destruya o altere gravemente su hábitat.

2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción.

3. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de tres meses a dos años.

Se trató de una gran reforma por la que se desglosó el artículo en varios apartados con el fin de clarificar mejor los tipos delictivos.

Dicha reforma terminó de transponer la Directiva 2008/99, en concreto, el artículo 3.f), ya que se sustituyó de forma efectiva la expresión «especies amenazadas» por la de «especies protegidas de fauna y flora silvestres» lo cual implicaba una notable ampliación del objeto material del delito al abarcar a todas las especies que son objeto de alguna protección, del tipo que sea, y no entrando a valorar su estado de conservación, tal y como recalcó la Audiencia Provincial de Valladolid en su sentencia 154/2016³⁸.

e) Redacción actual del artículo 334 tras reforma de 2023

Recogida en la Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal.

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general:

a) cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre;

b) trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas; o,

c) realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración.

La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, destruya o altere gravemente su hábitat.

³⁸ Jaime DORESTE HERNÁNDEZ. «Los delitos contra el medio ambiente. Guía práctica», (Ecologistas en Acción, España, 2022).

2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción.

3. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de tres meses a dos años.

4. *Se impondrá la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de entre dos a cuatro años, cuando los hechos relativos a los apartados a) y c) del apartado 1 se hubieran cometido utilizando armas, en actividades relacionadas o no con la caza.*

A través de esta reforma se añade la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas que, según Arturo Notivoli (capitán jefe del SEPRONA de la provincia de Huesca desde 2003 a 2017): «es la medida más efectiva contra los cazadores furtivos ya que les impide continuar con su dañina actividad en el medio y largo plazo»³⁹.

B) Artículo 335

Estamos ante un artículo que es un tipo atenuado del artículo previo, y que ha sido criticado por su deficiente técnica legislativa, debido a que es dificultoso identificar las conductas recogidas en dicho precepto. Esta confusión terminó desembocando incluso en una declaración de inconstitucionalidad y en sucesivas reformas.

No obstante, es evidente que no toda infracción de prohibiciones expresas relativas a la actividad cinegética o piscícola desembocará en una sanción penal, y es que la jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo núm. 570/2020 de 3 de noviembre) viene exigiendo «un plus de los delitos contra el medioambiente y solo aquellas conductas que vulneren o pongan en peligro el bien jurídico: biodiversidad, son merecedoras de sanción penal». La razón es que «no todo incumplimiento de una prohibición administrativa de caza puede ser calificado como delito si es una mera desobediencia a la normativa administrativa»⁴⁰.

Otro aspecto problemático son las autorizaciones, ya que los tribunales no consideran la actividad cinegética o la pesca como típicas si han sido previamente autorizadas de forma debida. Se requiere, por tanto, una norma que prohíba o impida la autorización. Un ejemplo de este razonamiento es el siguiente: «quedan fuera del ámbito del tipo las actividades de caza o pesca respecto de especies que, no estando incluidas en el artículo

³⁹ Entrevista con Arturo NOTIVOLI, capitán jefe del SEPRONA de la provincia de Huesca, (2003-2017), 21-3-24.

⁴⁰ Sentencia del Tribunal Supremo núm. 570/2020 de 3 de noviembre, (Rec. 5146/2019).

334, esté prevista de alguna forma alguna posibilidad de autorización. No se sanciona en realidad la falta de autorización administrativa, sino una conducta atentatoria al medioambiente al producir efectos negativos sobre determinadas especies de fauna respecto de las cuales no esté prevista la posibilidad de realizar tal conducta mediante la oportuna autorización administrativa»⁴¹.

En el mismo sentido, tampoco resulta sancionable, desde una perspectiva penal, la caza de una especie autorizada sin permiso en general o sin permiso concreto para una determinada zona geográfica⁴², tal como estableció el TS en su sentencia 1726/2002, de 22 de octubre. En este caso estaríamos ante un ilícito administrativo siguiendo el principio de intervención mínima.

a) Redacción original del artículo 335 en 1995

El que cace o pesque especies distintas a las indicadas en el artículo anterior, no estando expresamente autorizada su caza o pesca por las normas específicas en la materia, será castigado con la pena de multa de cuatro a ocho meses.

Se declaró la inconstitucionalidad de este artículo del Código Penal en su redacción original de 1995 mediante una sentencia del Tribunal Constitucional núm. 101/2012, de 8 de mayo:

«La norma penal cuestionada en el presente proceso constitucional no contiene efectivamente el núcleo esencial de la prohibición toda vez que remite íntegramente y sin ninguna precisión añadida la determinación de las especies no expresamente autorizadas a las normas específicas en materia de caza, de modo que es el Gobierno, a través de normas reglamentarias y, en particular, de los correspondientes listados de especies cinegéticas, y no el Parlamento, el que en forma por completo independiente y no subordinada a la ley termina en rigor por definir libremente la conducta típica.

De hecho, con el citado art. 335 CP en la mano, basta simplemente con que la Administración guarde silencio y no se pronuncie sobre la caza o no de una determinada especie animal para que su captura o muerte pase a integrar el tipo penal que consideramos. Todo lo cual supone, según hemos advertido en otras ocasiones, una vulneración de la garantía formal del principio de legalidad penal»⁴³.

⁴¹ Jaime DORESTE HERNÁNDEZ. «*Los delitos contra el medio ambiente. Guía práctica*». (Ecologistas en Acción, España, 2022).

⁴² Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1726/2002, de 22 de octubre.

⁴³ Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 101/2012, de 8 de mayo. Ref. BOE-A-2012-7511.

b) Redacción del artículo 335 tras reforma de 2003

Promulgada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Una gran reforma en la que se incluyen muchos apartados nuevos.

1. El que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, será castigado con la pena de multa de *ocho a 12 meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años*.

2. *El que cace o pesque especies a las que se refiere el apartado anterior en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular, será castigado con la pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de uno a tres años, además de las penas que pudieran corresponderle, en su caso, por la comisión del delito previsto en el apartado 1 de este artículo.*

3. *Si las conductas anteriores produjeran graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido a régimen cinegético especial, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de cazar y pescar por tiempo de dos a cinco años.*

4. *Se impondrá la pena en su mitad superior cuando las conductas tipificadas en este artículo se realicen en grupo de tres o más personas o utilizando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente.*

En la Exposición de motivos (III)⁴⁴ se argumenta en el párrafo g) que «se realizan determinadas modificaciones en los tipos delictivos que afectan al medioambiente, bienes jurídicos especialmente protegidos y objeto de una creciente preocupación social».

c) Redacción del artículo 335 tras reforma de 2015

Entró en vigor con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

1. El que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, será castigado con la pena de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años.

2. El que cace o pesque *o realice actividades de marisqueo relevantes* sobre especies distintas de las indicadas en el artículo anterior en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular *o sometidos a concesión o autorización marisquera o acuícola sin el debido título administrativo habilitante*, será castigado con la pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar, pescar *o realizar actividades de marisqueo*

⁴⁴ Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

por tiempo de uno a tres años, además de las penas que pudieran corresponderle, en su caso, por la comisión del delito previsto en el apartado 1 de este artículo.

3. Si las conductas anteriores produjeran graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido a régimen cinegético especial o a la sostenibilidad de los recursos en zonas de concesión o autorización marisquera o acuícola, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de cazar, pescar, y realizar actividades de marisqueo por tiempo de dos a cinco años.

4. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando las conductas tipificadas en este artículo se realicen en grupo de tres o más personas o utilizando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente.

La Voz de Galicia se hizo eco de la modificación legislativa el 23 de febrero de 2015, tras contactar con fuentes parlamentarias que justificaron la ampliación del tipo. Una enmienda del Partido Popular abogaba por «equiparar el furtivismo de las especies marisqueras con la caza y la pesca». Históricamente, las cofradías pesqueras gallegas lo habían venido reclamando, para poner trabas legales a los *percebeiros* furtivos⁴⁵.

d) Redacción actual del artículo 335 tras reforma de 2023

Implementada con la Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo.

1. El que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, será castigado con la pena de multa de ocho a doce meses, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años y *privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo*.

2. El que cace o pesque o realice actividades de marisqueo relevantes sobre especies distintas de las indicadas en el artículo anterior en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular o sometidos a concesión o autorización marisquera o acuícola sin el debido título administrativo habilitante, será castigado con la pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar, pescar o realizar actividades de marisqueo por tiempo de uno a tres años y *privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo*, además de las penas que pudieran corresponderle, en su caso, por la comisión del delito previsto en el apartado 1 de este artículo.

3. Si las conductas anteriores produjeran graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido a régimen cinegético especial o a la sostenibilidad de los recursos en zonas de concesión o autorización marisquera o acuícola, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial

⁴⁵ Marcos MINGUEZ. «El Código Penal establecerá como delito el furtivismo en el marisqueo» (La Voz de Galicia, 2015).

para el ejercicio de los derechos de cazar, pescar, y realizar actividades de marisqueo por tiempo de dos a cinco años *y privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo*.

En la Exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo se explica que, a través de dicha reforma y siguiendo la tendencia marcada por los legisladores alemanes y británicos, se incluye en nuestro ordenamiento jurídico la expresión «animal vertebrado», que sustituye y amplía la lista tasada de animales protegidos por el Código Penal. «De este modo, no únicamente los animales domésticos, domesticados, o que convivan con el ser humano verán su integridad física y emocional salvaguardada por la norma penal, sino que a ellos se añaden los animales silvestres que viven en libertad. Sin duda, este cambio enmienda una de las más evidentes carencias del tipo actual, que dejaba fuera de su ámbito de aplicación conductas de maltrato a animales silvestres que viven libres en su medio natural y que, si no pertenecen a especies protegidas, resultan impunes». Aunque ello no atañe directamente al artículo 335, es apropiado mencionarlo porque es un incremento notable de la protección de los animales silvestres.

Además, se añadió la pena accesoria relativa a la privación del derecho a tenencia y porte de armas, que ya se ha explicado en el punto 1.5.A) e) del presente TFG sobre el art. 334, pues se incluyó simultáneamente en ambos preceptos del Código Penal.

En el artículo 335, por otro lado, se suprimió el apartado 4, que contemplaba la posibilidad de imponer la pena en su mitad superior «sí se realiza en grupo de tres o más personas o usando medios prohibidos en ley o en reglamento». Este tipo agravado iba especialmente dirigido a todos aquellos que practicasen la caza en los denominados «días de fortuna», que son aquellos momentos en los que, debido a un incendio o a una inundación (por poner dos ejemplos muy gráficos), las presas tienen las facultades de defensa mermadas o están acorraladas en un determinado lugar.

En el mismo sentido, hay más medidas que buscan que la caza sea lo más justa posible y en muchas leyes autonómicas se prohíbe expresamente que un cazador se sitúe en la línea de retranca (a menos de 500 metros tras la línea más próxima de escopetas), que se usen explosivos o que se coloquen barreras artificiales para impedir la huida de las presas⁴⁶.

⁴⁶ Entrevista con Arturo NOTIVOLI, capitán jefe del SEPRONA de la provincia de Huesca, (2003-2017), 21-3-24.

2. DOLO, IMPRUDENCIA Y OTROS SUPUESTOS CONTEMPLADOS

Cuando un Agente de Protección de la Naturaleza o un forestal se encuentra con una especie protegida abatida por un disparo, se implementa un protocolo muy riguroso para el levantamiento del cadáver. Se recogen muestras de ADN, se realizan pruebas de balística si la bala no ha llegado a atravesar al animal (pruebas casi irrefutables ante un tribunal en caso de cotejo positivo), se realiza una necropsia en el centro veterinario que tiene asignadas dichas competencias, se peina el perímetro, y se respeta una cadena de custodia con el proyectil u otros objetos encontrados en las proximidades del espécimen abatido. Además, se revisan grabaciones de carreteras o vías de tren buscando alguna pista que pueda llevar hasta el furtivo, e incluso se entrevista a posibles testigos. En los casos más graves, se ponen en práctica actuaciones más intrusivas como el balizamiento de vehículos, las intervenciones telefónicas o una entrada y registro a un domicilio⁴⁷.

Todas estas pesquisas ayudan a dilucidar si hubo dolo por parte del cazador o si, en cambio, se trató de una imprudencia o incluso un caso fortuito provocado por un accidente o miedo insuperable (causa de inculpabilidad)⁴⁸. El cazador tiene la obligación de leerse el Plan Anual de Caza, en donde viene explicitado de forma minuciosa qué se puede cazar, cuándo y cómo, y si se incumple, el Estado debe imponer multas coercitivas y penas de prisión si la gravedad de la acción lo requiere⁴⁹.

2.1 Error de tipo y error de prohibición

El delito recogido en el artículo 334 es un delito doloso, con dolo directo o eventual, y el apartado 3 recoge una posible comisión por imprudencia grave. En cualquier caso, antes de la inclusión del punto 3, podía darse la circunstancia de que alguien desconociera que esa especie estaba entre las amenazadas y, ya fuere un error vencible o no, esto determinaba la impunidad de la conducta⁵⁰. Esta inclusión se llevó a cabo en 2015, solucionándose así el inconveniente que surgía para los casos en los que error se

⁴⁷ Entrevista con Arturo NOTIVOLI, capitán jefe del SEPRONA de la provincia de Huesca, (2003-2017), 21-3-24.

⁴⁸ F.V. «Disparó sobre la osa a bocajarro, cuando se iba a abalanzar sobre él» (El Periódico de Aragón, 2020).

⁴⁹ Entrevista con Fernando TELLO, presidente de la Federación Aragonesa de Caza, (2004-2021), 10-4-24.

⁵⁰ Juan Antonio MARTOS NÚÑEZ. J.A. «Lección 18ª», en Miguel POLAINO NAVARRETE, «Lecciones de Derecho Penal parte especial», Tomo 1, 2ª edición, (Tecnos, Madrid, 2019).

consideraba vencible ya que, en ese caso, el delito es ahora condenado por imprudencia. Estamos ante un tipo distinto que viene a cubrir esa laguna legal preexistente.

En cualquier caso, respecto al error de tipo, aunque las Comunidades Autónomas han tratado de evitar que se convierta en una alegación recurrente ante los tribunales otorgando la licencia de caza bajo la condición de un estudio previo de la lista de especies protegidas y amenazadas, todavía muchos acusados argumentan que, aunque han matado a un lobo, creían que se trataba de un ciervo, y que la maleza de la zona les impidió distinguirlo con claridad⁵¹. Estos cursos de capacitación se han aplicado de forma tardía por norma general, y *verbi gratia* en la Comunidad Valenciana no se han cursado hasta 2015, cuando la Orden 13/2015 de 27 de mayo de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente fijó el examen y el curso de 20 horas que ya se había concebido once años antes, en 2004⁵².

En ese caso estamos ante un error en los elementos objetivos del tipo so creencia de que la especie a la que se creía estar abatiendo no figuraba en las listas de especies protegidas. Hay un juicio falso y es un error apoyado en el desconocimiento total de las circunstancias del hecho a las que se vincula la norma de complemento⁵³, en este caso la lista de especies bajo protección. En otras palabras, matas a una especie creyendo que estás matando otra. Estaríamos aquí en un error en el objeto.

Se puede producir un error por un cambio relevante en el curso causal previsto por el autor. Por ejemplo, si durante un estudio científico al tratar de alcanzar con un dardo somnífero a un oso pardo, este salta por un barranco y termina falleciendo a causa de la caída. Se ha producido una muerte, pero como resultado de una desviación relevante del curso causal previsto por el autor.

Finalmente, cabría la posibilidad de un error en el golpe si tratando de matar a una persona, terminas abatiendo un lince ibérico (*Lynx pardinus*), en cuyo caso estamos ante la concurrencia de un concurso de delitos de tentativa del delito e imprudencia consumada.

⁵¹ Carlos ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, «Comentarios al Código Penal. Segunda Época», Tomo X, (VOL. II), Libro II, (CESEJ Ediciones, Madrid, 2006).

⁵² Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana.

⁵³ César CHAVES. Cap. La caza de especies protegidas y el error de tipo, José L. GONZÁLEZ CUSSAC, «Estudios jurídicos en memoria de la profesora doctora Elena Górriz Royo», (Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020).

Por otro lado, existe la opción de que nos hallemos ante un error de prohibición, en el cual el sujeto que comete la acción ignora por completo que se trate de una acción antijurídica, lo cual es difícilmente alegable si se exige una formación previa para obtener la licencia de caza. Se distingue entre error directo de prohibición, si el error recae sobre la existencia de la norma prohibitiva, o el error indirecto, que versa sobre la existencia o presupuestos de una causa de justificación: (estado de necesidad). Si el error de prohibición fuera vencible se rebaja la pena en 1 o 2 grados. La teoría de la culpabilidad restringida considera estos errores de prohibición indirectos como errores de tipo.

A la hora de determinar si un error es vencible o invencible entran en juego diversos factores como si era un requisito cursar una formación para obtener la licencia en el momento de la expedición de la misma, la experiencia del cazador o el parecido razonable entre las especies (si un cazador está cazando perdices, difícilmente se podrá aceptar como error invencible abatir a un urogallo). Otras circunstancias como, por ejemplo, si la actividad se desarrolla en el hábitat natural de la especie abatida o si, por el contrario, es un ave migratoria que se ha desviado de su ruta habitual; también se tendrán también en consideración.

2.2 Imprudencia grave del 334.3

Una novedad que se introdujo en el año 2015 fue que, en caso de que se califique el error de tipo como vencible, se cataloga como imprudencia grave por parte del autor. Así pues, tan solo si se considera error invencible quedaría completamente impune.

La imprudencia supone una mera falta de cuidado en la que, en muchas ocasiones, el sujeto no se plantea la posibilidad de causarle un daño al bien jurídico. Si se califica como error vencible es porque el juez ha concluido que el sujeto no se cercioró de forma adecuada acerca de si la especie a la que trataba de dar caza era la permitida y no una especie protegida o en peligro de extinción⁵⁴.

En cualquier caso, la imprudencia es difícil de alegar ante un tribunal, pero el legislador ha querido incluirlo para los casos de error de tipo vencible, que antes quedaban completamente impunes al no concurrir el tipo subjetivo del dolo en la consumación del delito.

⁵⁴ José Antonio MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Blas MUÑOZ BENÍTEZ, «*Delitos contra especies protegidas de la fauna silvestre*», (Bosch Editor, Barcelona, 2023).

2.3 Impunidad en casos de estado de necesidad

El caso arquetípico en la mente de los penalistas es aquel en el cual una persona extraviada en la montaña se ve obligada a cazar un alimoche (*Neophron percnopterus*) para su propia subsistencia, porque está en riesgo de morir de inanición y ni siquiera puede permitirse valorar, por razones obvias, si esa especie está categorizada como especie protegida o en peligro de extinción. Estamos ante un ejemplo de impunidad y la razón se justifica en un estado de necesidad, dado que se lleva a cabo un mal menor, la ejecución del ave mencionada, para preservar un bien mayor, la vida de un ser humano.

En el Derecho Penal se contempla incluso la posibilidad de que un humano termine con la vida de otro para garantizar su propia supervivencia en un naufragio (Tabla de Carnéades): en este caso, a diferencia del anterior, se trata de un estado de necesidad como causa de inculpabilidad (el previo es una causa de justificación). Partiendo de esta premisa, con más razón sería posible contemplar la absolución en el caso del alimoche.

Sin embargo, hay otros ejemplos de estado de necesidad más realistas y factibles, y entre ellos conviene mencionar el de la necesidad de sacrificar un determinado grupo de aves protegidas porque han contraído la gripe aviar con el fin de evitar un contagio de la enfermedad al resto de la colonia⁵⁵.

2.4 Miedo insuperable

Otra casuística común es cuando un cazador se encuentra en una situación de peligro y, experimentando un miedo insuperable, decide disparar contra la especie protegida. En este caso, dicho argumento podría aceptarse si el animal en cuestión fuese un animal peligroso como el lobo, un oso o un tilacino.

En Aragón ocurrió algo similar con la osa Sarousse, y el Juzgado de Instrucción de Boltaña ordenó el archivo de la causa penal precisamente por aceptar este argumento⁵⁶. En este caso concreto, podría coexistir el miedo insuperable con un estado de necesidad como causa de justificación.

⁵⁵ Carlos ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, «Comentarios al Código Penal. Segunda Época», Tomo X, (VOL II), Libro II, (CESEJ Ediciones, Madrid, 2006).

⁵⁶ FUNDACIÓN OSO PARDO «Incógnitas sin resolver en la muerte de la osa Sarousse, y dejación de funciones del Gobierno de Aragón en la conservación de sus osos» (Fundación Oso Pardo, 2021).

2.5 Falta de medios para perseguir al furtivo y penas poco disuasorias

El problema al que se enfrenta el SEPRONA en el día a día es la falta de personal y la escasez de medios para poder llevar a cabo investigaciones y seguimientos. Además, los casos se demoran mucho porque los laboratorios de analíticas priorizan otros crímenes como los homicidios o las violaciones. Al furtivo local que, de forma esporádica, sale a cazar una especie protegida para tenerla disecada en su casa, no es posible atraparle, porque en el monte siempre lleva mucha ventaja ya que conoce bien el terreno⁵⁷. La única vía posible es una mayor labor de concienciación que inocule el conservacionismo entre todos los cazadores.

Además, gran parte de los procesos judiciales terminan con una pena de multa que no supone un mayor problema para el furtivo, en especial si pertenece a una red; ya que son personas que suelen disfrutar de una economía doméstica saneada. La pena accesoria de la prohibición de porte de armas es la que más les afecta porque si se les sorprendiera incumpliendo dicha prohibición, se les aplicaría el art. 564.1 del CP y se castiga con penas privativas de libertad, que por reincidencia podrían desembocar en una entrada efectiva en prisión.

En definitiva, el cazador conservacionista no supone un problema para la biodiversidad, pero sí son una amenaza, primeramente, las redes de furtivismo que fragmentan poblaciones y que provocan que las especies se muestran más vulnerables a contraer enfermedades (en el caso de los sarrios *Rupicapra pirenaica*, son más propensos a la queratoconjuntivitis o al pestivirus) y, en segundo lugar, el ánimo de lucro⁵⁸, que antaño promovía la caza de especies a nivel industrial (el zarapito esquimal, la vaca marina de Steller o la paloma migratoria son tres tristes ejemplos).

⁵⁷ Entrevista con Arturo NOTIVOLI, capitán jefe del SEPRONA de la provincia de Huesca, (2003-2017), 21-3-24.

⁵⁸ Entrevista con Arturo NOTIVOLI... *cit.*

3. JURISPRUDENCIA, REPARACIÓN DEL DAÑO E INTERVENCIÓN MÍNIMA

3.1 Jurisprudencia relacionada

A continuación, se analizan varias sentencias para determinar cuáles son los patrones habituales que aplican los jueces en los fundamentos de derecho; en materia de autoría y cómo modulan la aplicación de las penas incluyendo en muchas ocasiones penas accesorias, como la inhabilitación del uso de armas o a la obligatoriedad de compensar y reparar el daño causado, ateniéndose a las circunstancias del hecho luctuoso.

Con una marcada tendencia maximalista, cada vez se han ido cubriendo más lagunas, y en ese sentido, el Tribunal Supremo estableció en el año 2020 «que la caza en tiempo de veda es delito al poner en peligro la biodiversidad». Ya no solo se trata entonces de una mera infracción administrativa, sino que, al afectar de forma directa al bien jurídico protegido: la conservación de la biodiversidad, el hecho de cazar una especie fuera del plazo temporal prefijado por las autoridades competentes es un delito, y debe ser castigado como tal⁵⁹. Conviene añadir que las audiencias provinciales siguen también esa línea maximalista. Por ejemplo, en la Audiencia Provincial de Córdoba argumentan en su sentencia núm. 121/2018 de 4 abril, que «no resultaría conveniente, en un entendimiento cabal de la protección de las especies y acorde con la realidad social actual, posponer la protección penal hasta que éstas necesiten una especial actuación conservacionista»⁶⁰.

Al mismo tiempo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido más límites a la actividad del furtivo con la sentencia núm. 612/2022 (Recurso de Casación 1482/2021), que puso fin al debate acerca de cómo interpretar el artículo 335.2 de nuestro Código Penal. La gran duda era si el furtivismo, aún sin dar caza al animal, podía ser castigado penalmente o se debía de considerar exclusivamente como una falta administrativa.

El Supremo dejó sentadas las bases para abordar dicha problemática fijando los tres elementos del tipo que son requeridos para que la actividad del furtivo pueda ser considerada como un crimen. En primer lugar, en el 335 se exige para su aplicación la caza de una especie cinegética, dicho de otro modo, no protegida, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza. En caso de que se

⁵⁹ PODER JUDICIAL «*El Tribunal Supremo establece que la caza en tiempo de veda es delito al poner en peligro la biodiversidad*» (Poder Judicial, 2020), Acceso el 28-4-24.

⁶⁰ Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 2ª) núm. 121/2018 de 4 abril ARP\2018\991

tratase de una especie protegida, el hecho típico se ubicaría en el marco del artículo 334, que es el régimen agravado. El segundo elemento para que un cazador pueda ser condenado por furtivismo es que la actividad se desarrolle en un coto de caza, bajo el amparo de un plan de ordenación cinegética, y que, por último, dicho furtivo no cuente con autorización de ningún tipo por parte del propietario de dichos terrenos. El artículo 335.2 recoge un delito de mera actividad, y, en consecuencia, no es necesario que el animal sea abatido para su aplicación.

Respecto a la autoría, para la jurisprudencia, en estos casos va más allá del autor material, porque todos los participantes en la montería fueron condenados en 6 de marzo de 2009 en la Audiencia Provincial de Badajoz⁶¹, ya que «el acto de cazar no se limita a la acción de disparar el arma y dar muerte al animal, sino que comprende también los actos de colaboración y participación en el global del concepto de caza»⁶².

Conviene poner fin a este punto 3.1 del desarrollo de este TFG, centrado en la jurisprudencia, sumergiéndonos en la cuestión de las penas accesorias de inhabilitación para la caza y pesca, así como la reparación de daños.

Con respecto a la inhabilitación especial para el ejercicio de la caza y pesca, es posible inhabilitar hasta cinco años en el art. 335 y, a veces, la pena accesoria va acompañada de una reparación de daños que se concreta en una cifra económica.

Sirva como ejemplo esta sentencia núm. 441/14. de Juzgado núm. 11. de lo Penal (Valencia) que termina su veredicto con un fallo que incluye una «inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar por tiempo de dos años. Y a que, por vía de responsabilidad civil, indemnice a la Reserva de Caza de la Mola de Cortes de Pallas en la persona de su representante legal en la cantidad de ocho mil ochocientos ochenta y nueve euros por los daños y perjuicios causados (8.889 €). Más las costas procesales»⁶³.

⁶¹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, (Sección 3ª) núm. 49/2009 de 06 de Marzo de 2009 (Rec. 81/2008)

⁶² María del Carmen GÓMEZ RIVERO, «*Fundamentos de Derecho Penal. Parte Especial*», VOL. I, (Tecnos, Madrid, 2022).

⁶³ Sentencia del Juzgado (núm. 11) de lo Penal de Valencia, núm. 441/14.

3.2 Reparación del daño

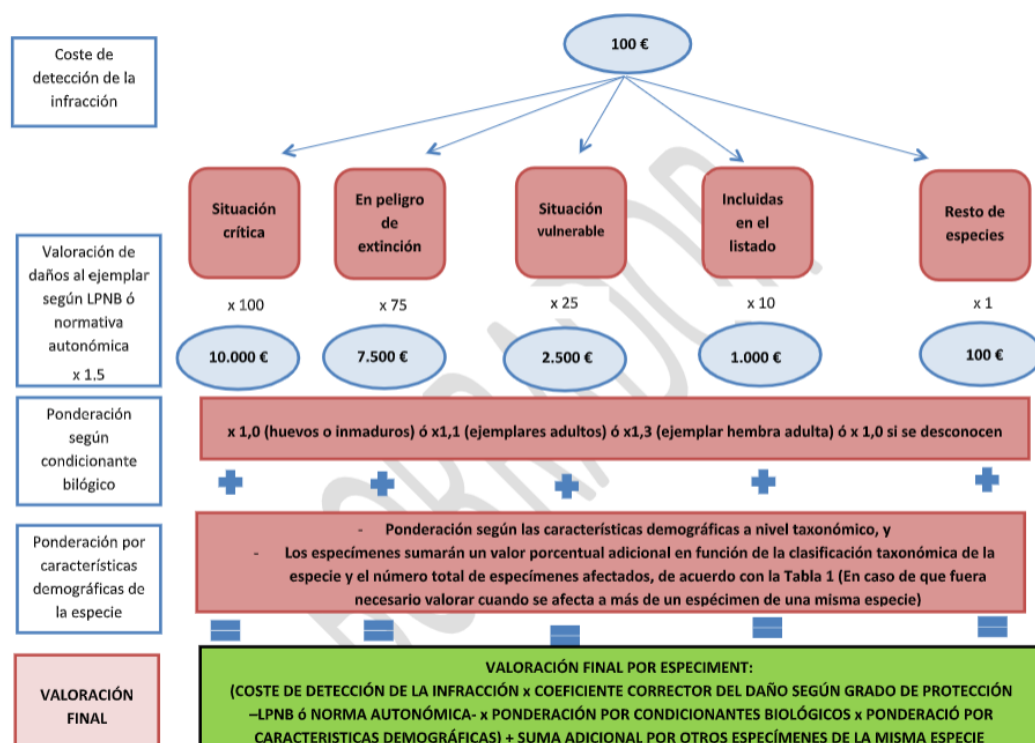
Los daños causados son difíciles de medir, pero, actualmente está en vía de promulgación, tras haber superado el paso previo de la aprobación del Comité, un Protocolo de valoración económica de especímenes de fauna silvestre autóctona protegida. Dicho protocolo ha sido elaborado en los últimos meses por el Comité de Flora y Fauna Silvestres de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, compuesto tanto por Comunidades Autónomas y como por la Administración General del Estado. La finalidad de este protocolo es la de proporcionar una metodología sistematizada para llevar a cabo una valoración económica de los impactos y daños producidos al dar caza a ciertos ejemplares de fauna silvestre. Los criterios para establecer los daños son una combinación de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, condicionantes biológicos del ejemplar abatido y otros aspectos demográficos de la especie. El ámbito geográfico de aplicación será todo el territorio español, tanto el terrestre como el marítimo, dentro de los límites de la zona económica exclusiva.

Las fases secuenciales para el cálculo del valor económico del daño son un total de cinco⁶⁴:

- 1. Coste aplicable a la detección de la infracción.
- 2. Valoración de daños fundamentada en la Ley 42/2007.
- 3. Valoración adicional de daños fundamentada en la normativa autonómica.
- 4. Ponderación por condicionantes biológicos del ejemplar.
- 5. Ponderación por características demográficas de la especie.

Los importes van desde los 100 euros por ejemplar, hasta 75 veces más si el ejemplar no solo está protegido, sino que tiene la catalogación de peligro de extinción. Si está considerada vulnerable, se aplica una multiplicación de 25 veces. Finalmente, si la especie está en una situación crítica, se multiplicaría esa cifra de 100 euros por 100, dando lugar a 10.000 euros de sanción.

⁶⁴ «Protocolo de valoración económica de especímenes de fauna silvestre autóctona protegida» (Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 2024).



Fuente: «Protocolo de valoración económica de especímenes de fauna silvestre autóctona protegida». (Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 2024)

Bajo estas líneas figuran un par de ejemplos prácticos con una finalidad clarificadora.

- 1. Hembra adulta de cigüeña negra (*Ciconia nigra*) encontrada muerta:

- Coste base: 100 €

- Coeficiente corrector por especie vulnerable: 25 + Coeficiente de corrección por estado biológico: 1,3

Valoración final resultante $(100 \times 25 \times 1,3) = 3.250 \text{ €}$

- 2. Una hembra y un huevo de cerceta pardilla (*Marmaronetta angustirostris*) encontrados muerta/destruido:

- Coste base: 100 €

- Coeficiente corrector por especie en peligro crítico: 100 + Coeficiente de corrección por estado biológico: 1,3 para la hembra adulta y 1,0 para el huevo.

Valoración final resultante $(100 \times 100 \times 1,3 \times 100\% \text{ para el ejemplar hembra adulta}) + (100 \times 100 \times 1,0 \times 50\% \text{ para el ejemplar huevo}) = 13.000 \text{ €} + 5.000 \text{ €} = 18.000 \text{ €}$.⁶⁵

⁶⁵ «Protocolo de valoración económica de especímenes de fauna silvestre autóctona protegida» (Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 2024).

Sin duda, con esta sistematización, que se pretende aplicar tras la aprobación definitiva del documento, los jueces de lo Penal dispondrán de una herramienta más para determinar las penas accesorias que tengan como objetivo reparar el daño causado.

Se considera que el Estado y las autonomías han invertido mucho esfuerzo en la recuperación de las especies y, si un cazador abate uno de estos especímenes, ya sea de forma dolosa o imprudente, es procedente repercutirle parte de los costes en los que ha incurrido la administración.

3.3 Deslinde entre tipos penales e ilícitos administrativos

Bien es sabido que el Derecho Penal solo debe entrar en los casos de extrema gravedad. Los principios político-criminales del Derecho Penal moderno son límites para el *ius puniendi* siguiendo el principio de mínima intervención: carácter fragmentario y última ratio sancionadora (carácter subsidiario). Estas premisas establecen que el Derecho Penal protege solo determinados bienes jurídicos (que se protegen frente a las formas de agresión integradas por las conductas más graves) y que se aplica cuando al Estado no le queda otro recurso a la hora de restaurar y preservar el orden jurídico⁶⁶.

Por ese motivo, básico en el ámbito del Derecho Penal, algunas de las acciones no serán nunca castigadas con una pena de prisión o de multa, si no que se saldarán con una responsabilidad administrativa. Debemos destacar que, a nivel jurisprudencial, se ha venido usando un sistema restrictivo siguiendo estos principios. «La captura de un ejemplar en una especie cuya caza está autorizada previa licencia o permiso especial, careciendo del mismo o fuera de los límites geográficos, temporales o cuantitativos administrativamente establecidos, constituye una infracción administrativa, pero no se integra en el artículo 335 del Código Penal, pues éste concreta su prohibición a la caza o pesca de especies no expresamente autorizadas, y no puede extenderse a otros supuestos distintos no comprendidos expresamente en el mismo»⁶⁷. El Tribunal Supremo estableció a finales del siglo XX estos criterios en la sentencia núm. 1302/1999, 8 de febrero de 2000, lo cual terminó derivando en una modificación del artículo 335 por su inconstitucionalidad, declarada mediante la sentencia núm. 101/2012, de 8 de mayo, por el Tribunal Constitucional.⁶⁸

⁶⁶ José Antonio MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Blas MUÑOZ BENÍTEZ, «*Delitos contra especies protegidas de la fauna silvestre*», (Bosch Editor, Barcelona, 2023).

⁶⁷ Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1302/1999, 8 de febrero de 2000.

⁶⁸ Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 101/2012, de 8 de mayo. BOE-A-2012-7511.

En ocasiones, los hechos no generan una responsabilidad de relevancia penal, pero eso no excluye que los mismos hechos puedan ser considerados un ilícito administrativo. La doctrina del Tribunal Supremo exige un plus de reprochabilidad y para separar un hecho criminal de una mera infracción o ilícito administrativo se basa en elementos cualitativos y cuantitativos relacionadas con el resultado / lesión del bien jurídico que se pretende proteger: la biodiversidad. Además, entran en juego otros elementos clave como la proporcionalidad y la habitual interpretación restrictiva propia del Derecho Penal⁶⁹.

Por supuesto, hay que tener siempre presente el principio *non bis in idem*, que determina y fija una prohibición de duplicidad de sanciones administrativas y penales para un mismo supuesto de hecho, con identidad de sujeto, acción y fundamento⁷⁰.

⁶⁹ José Antonio MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Blas MUÑOZ BENÍTEZ, «*Delitos contra especies protegidas de la fauna silvestre*», (Bosch Editor, Barcelona, 2023).

⁷⁰ Lucía ALARCÓN SOTOMAYOR, «*La garantía non bis in idem y el procedimiento sancionador*», (Iustel, Madrid, 2008).

III. CONCLUSIONES

Las conclusiones de este Trabajo de Fin de Grado van a abordar los temas fundamentales que se han desarrollado a lo largo de la investigación.

- Evolución legislativa hacia la maximización: desde el último cuarto del siglo XX, la normativa en el ámbito del medioambiente ha experimentado un crecimiento casi exponencial, sobre todo en los países miembros de la Unión Europea, que son los que hacen gala de una mayor regulación en este sentido. La biodiversidad se ha convertido en las últimas décadas en un bien jurídico protegido al más alto nivel. Los legisladores han optado por darle la mayor protección posible a las especies amenazadas y en peligro de extinción, con castigos que incluyen penas privativas de libertad en los casos más graves. Además, los tipos analizados en este Trabajo de Fin de Grado han sufrido respectivas modificaciones en los que se ha ido ampliando progresivamente la casuística y se han añadido posibles comisiones por imprudencia o penas accesorias como la inhabilitación para la tenencia y porte de armas o la inhabilitación para cazar y pescar.
- Aplicación restrictiva por parte de los jueces y magistrados de la legislación penal: a pesar de la ampliación de las casuísticas y del incremento de las penas, los jueces han llevado a cabo una aplicación restrictiva, admitiendo alegaciones de errores de tipo y archivando causas como la de la osa Sarousse⁷¹, por poner un ejemplo geográficamente cercano. El principio de mínima intervención y de proporcionalidad siempre están presentes en las sentencias: el Derecho Penal solo debe de entrar en los casos más graves. Ahí es donde se ubica el deslinde con los ilícitos administrativos correspondientes, que son sanciones que se aplican con muchísima más frecuencia.

⁷¹ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, F.V. «Disparó sobre la osa a bocajarro, cuando se iba a abalanzar sobre él», (El Periódico de Aragón, 2020)

- Gran peso de las denominadas «leyes penales en blanco»: la lista de especies en peligro de extinción y de especies protegidas es una lista en constante movimiento, y cada día son más las especies que se encuentran arrinconadas, con un hábitat destruido, la población fragmentada o expuestas a enfermedades por culpa de la consanguinidad. Por ese motivo, de nada serviría que hubiera una lista inamovible que solo pudiera actualizarse mediante una ley orgánica. Para que estos artículos tengan eficacia práctica deben regirse mediante remisiones a reglamentos en los que se actualizan con mayor agilidad las listas de especies protegidas. En lo que atañe al artículo 335, incluso puede afectar a especies de las que se ha prohibido expresamente su caza en esa misma fecha en la que el cazador se dirige al monte, porque son vetos temporales y regionales que se imponen en situaciones concretas.
- Protección de las especies en peligro: luces y sombras. El proyecto estrella del Estado español ha sido la recuperación del lince ibérico, que estuvo muy cerca de desaparecer a finales del siglo XX. Sin embargo, otros programas de conservación como el de Ordesa con el bucardo no fueron aplicados con la dureza y el rigor necesarios para salvar a la especie, que se extinguió a comienzos del 2000. Hay otros muchos casos en los que quisiera detenerme, pero destacaría el del urogallo⁷² o el del quebrantahuesos⁷³, que son dos aves que también tienen su futuro en entredicho, aunque hay sendos planes de recuperación para esas magníficas especies.
- Penas poco disuasorias y que rara vez comportan una condena de prisión. Uno de los mayores problemas, en opinión de los expertos, es que las penas tienen una duración de unos meses y son, en consecuencia, suspendidas por los jueces y magistrados, por lo que el furtivo no entra nunca en prisión. La pena accesoria que prohíbe la tenencia y porte de armas durante un lapso de tiempo que, en ocasiones, alcanza varios años de duración, es realmente efectiva para frenar esta lacra. Su inclusión en el año 2023 en el 334 y 335, ha tenido una buena recepción entre los organismos destinados a la protección de la biodiversidad.

⁷² Decreto 4/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico (*Tetrao urogallus cantabricus*). (Castilla y León).

⁷³ Decreto 184/1994, de 31 de agosto, de la Diputación General de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*).

- Reparación del daño: la elaboración del Protocolo de valoración económica de especímenes de fauna silvestre autóctona protegida por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad en 2024 evidencia que las administraciones quieren llevar a cabo esfuerzos para la conservación de la biodiversidad. Al margen de las medidas coercitivas en forma de sentencias penales y sanciones administrativas, el instrumento para calcular con exactitud la indemnización que debe pagar el responsable de abatir una especie protegida es una herramienta útil y básica a la hora de justificar de forma apropiada la cifra económica que acompañe a las sentencias. Con la implementación de este sistema, las administraciones dispondrán de más medios para garantizar la conservación de las especies, con nuevos programas de cría o creación de áreas protegidas.

Finalmente, y como apunte final un poco esperanzador, me gustaría terminar hablando de la desextinción, que es una ciencia de futuro y del presente. Los avances en el ámbito de la genética permitieron traer de vuelta al bucardo (*Capra pyrenaica pyrenaica*), aunque el ejemplar falleció poco después del alumbramiento. En cualquier caso, como dice Alberto Fernández-Arias, jefe del Servicio de Caza, Pesca y Medio Acuático del Gobierno de Aragón, que dirigió aquel programa de clonación dice que «fue un paso científico, y la ciencia es una escalera muy larga y se dan pequeños pasos, que otros equipos aprovecharán en el futuro», lo que, sin duda, nos permitirá que la desextinción de especies desaparecidas deje de ser una utopía en los años venideros⁷⁴.

Ojalá estas palabras se cumplan y ayuden a rescatar del pasado especies como el alca gigante (*Pinguinus impennis*), extinta en 1852 y de la cual tuve la posibilidad de contemplar dos ejemplares disecados con motivo de la realización de este TFG, en una visita privada al depósito de Historia Natural del *Národní Muzeum* de Praga (República Checa), el pasado 6 de marzo, cortesía de *PhDr.* Jan Husek⁷⁵. Aunque, como puntualizó Fernández-Arias, «con aves es un proceso mucho más complicado y no se han logrado grandes avances»⁷⁶.

⁷⁴ Entrevista con Alberto FERNÁNDEZ-ARIAS, jefe del Servicio de Caza, Pesca y Medio Acuático. Gobierno de Aragón, (2012-actualidad), 12-04-24.

⁷⁵ Visita al depósito de Historia Natural del *Národní Muzeum* en Praga con *PhDr.* Jan HUSEK (6-03-24) para ver dos ejemplares de *pinguinus impennis*.

⁷⁶ Entrevista con Alberto FERNÁNDEZ-ARIAS... *cit.*

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DOCUMENTALES

Libros, ensayos y manuales doctrinales

ALARCÓN SOTOMAYOR, L. «*La garantía non bis in idem y el procedimiento sancionador*», (Iustel, Madrid, 2008).

ALASTUEY DOBÓN. C. «Delitos relativos a la ordenación del territorio», en ROMEO CASABONA, SOLA RECHE, BOLDOVA PASAMAR (Coord.) «*Derecho Penal español, parte especial*», 2ª edición, (Editorial Comares, Granada, 2022), P. 589.

ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. «*Comentarios al Código Penal. Segunda Época*», Tomo X (VOL. II) Libro II (CESEJ Ediciones, Madrid, 2006).

BOUCHNER, M. «*Animales de caza*», (Aventium, Praha, 1988), P. 8.

CHAVES, C. Cap. La caza de especies protegidas y el error de tipo, en GONZÁLEZ CUSSAC J. «*Estudios jurídicos en memoria de la profesora doctora Elena Górriz Royo*», (Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020), Pp. 199 y ss.

DORESTE HERNÁNDEZ, J. «*Los delitos contra el medio ambiente. Guía práctica*», (Ecologistas en Acción, España, 2022), Pp. 32-34.

FEAL VÁZQUEZ. J. «*Biodiversidad*», Boletín de Información, núm. 279, (Ministerio de Defensa, 2003), Pp. 83 y ss.

GÓMEZ RIVERO, M.C. «*Fundamentos de Derecho Penal Parte Especial*», VOL. I (Tecnos, Madrid, 2022), Pp. 368 y ss.

GRAU FERNÁNDEZ, S. «*El actual derecho de caza en España*», núm. 85, (Revista de Estudios Agrosociales, 1973), Pp. 2 y ss.

LEOPOLD. A. «*Round River. From the Journals of Aldo Leopold*», (Oxford University Press, Oxford, 1993), Pp. 145 y ss.

MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E. «*Lecciones de Derecho Penal Parte Especial*», 2ª edición, (Tirant Lo Blanch, Valencia, 2021), P. 473

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, J.A, MUÑOZ BENÍTEZ, B. «*Delitos contra especies protegidas de la fauna silvestre*», (Bosch Editor, Barcelona, 2023), Pp. 101 y ss.

MARTOS NÚÑEZ. J.A. «Lección 18ª», en POLAINO NAVARRETE, M. «*Lecciones de Derecho Penal parte especial*», Tomo 1, 2ª edición, (Tecnos, Madrid, 2019), Pp.426 y ss.

MESTRE DELGADO, E. Tema 16 «Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente», LAMARCA PÉREZ. C. (Coord.), «*Derecho Penal Parte Especial*», 4ª edición, (COLEX, Madrid, 2008), Pp. 456.

MUÑOZ CONDE. F. «*Derecho Penal Parte Especial*», 24ª edición, Puesta al día con la colaboración de Carmen López Peregrín, (Tirant Lo Blanch, Valencia, 2022), P. 603.

PEDRÓS-ALIÓ, C. «*Bajo la piel del océano*», (Plataforma Editorial, Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), 2017), P. 62.

QUERALT JÍMENEZ. J. «*Derecho Penal español, parte especial*», Cap. 27. 7ª edición, (Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015), Pp. 996 y ss.

Legislación y documentos oficiales

Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modificaba la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana.

Decreto 184/1994, de 31 de agosto, de la Diputación General de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*).

Decreto 4/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico (*Tetrao urogallus cantabricus*), (Castilla y León).

Decreto 129/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.

«*Protocolo de valoración económica de especímenes de fauna silvestre autóctona protegida*», (Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 2024).

Jurisprudencia

Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 101/2012, de 8 de mayo. BOE-A-2012-7511.

Sentencia del Tribunal Supremo, (Sala 2ª), núm. 1302/1999, 8 de febrero de 2000.

Sentencia del Tribunal Supremo, (Sala 2ª), núm. 2227/2001, 29 de noviembre de 2001, ECLI: ES:TS:2001:9368.

Sentencia del Tribunal Supremo, (Sala 2ª), núm. 1726/2002, de 22 de octubre, ECLI: ES:TS:2002:6936.

Sentencia del Tribunal Supremo, (Sala 2ª), núm. 187/2006, de 23 de febrero. núm. Cendoj: 28079120012006100153.

Sentencia del Tribunal Supremo, (Sala 2ª), núm. 570/2020 de 3 de noviembre (Rec. 5146/2019), ECLI:ES:TS: 2020:3566.

Sentencia del Tribunal Supremo, (Sala 2ª), núm. 612/2022, de 22 de junio (Rec. 1482/2021), ECLI:ES:TS:2022:2626.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, (Sección 3ª) núm. 49/2009 de 06 de Marzo de 2009 (Rec. 81/2008), ECLI: ES:APBA:2009:774.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 4ª), núm. 154/2016, de 23 de mayo de 2016 (Rec. 375/2016), núm. Cendoj: 47186370042016100135.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 2ª) núm. 121/2018 de 4 abril ARP\2018\991, ECLI:ES:APCO:2018:296.

Sentencia del Juzgado (núm. 11) de lo Penal de Valencia, núm. 441/14.

Entrevistas y reuniones

Entrevista con Alfonso CALVO, director general del Medio Natural. Gobierno de Aragón, (2023-actualidad), 9-4-24.

Entrevista con Alberto FERNÁNDEZ-ARIAS, jefe del Servicio de Caza, Pesca y Medio Acuático. Gobierno de Aragón, (2012-actualidad), 12-04-24.

Entrevista con Arturo NOTIVOLI, capitán jefe del SEPRONA de la provincia de Huesca, (2003-2017), 21-3-24.

Entrevista con Fernando TELLO, presidente de la Federación Aragonesa de Caza, (2004-2021), 10-4-24.

Visita al depósito de Historia Natural del *Národní Muzeum* en Praga (6-03-24) con *PhDr.* Jan HUSEK, para ver dos ejemplares de *Pinguinus impennis*.

Artículos de prensa electrónica y sitios web

CITES. <<https://cites.org/esp/disc/what.php>> Acceso el 29-03-24.

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN, «*El lobo ya no es una especie cinegética en España*», <<https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/aragon/2021/09/22/el-lobo-ya-no-es-una-especie-cinegetica-en-espana-1521049-daa.html>> (Diario del Alto Aragón, 2021) Acceso el 25-03-24.

EL DÍA, C.A.C. «*Arrestado en Canarias por pescar y despedazar un angelote*», (El Día, La Opinión de Tenerife, 2023) <<https://www.eldia.es/sucesos/sucesos-en-canarias/2023/12/10/arrestado-canarias-pescar-despedazar-angelote-95665060.html>> Acceso el 15-5-24.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, F.V. «*Disparó sobre la osa a bocajarro, cuando se iba a abalanzar sobre él*», (El Periódico de Aragón, 2020) <<https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2020/12/02/disparo-osa-bocajarro-iba-abalanzar-46479689.html>> Acceso el 28-3-24.

FUNDACIÓN OSO PARDO, «*Incógnitas sin resolver en la muerte de la osa Sarousse, y dejación de funciones del Gobierno de Aragón en la conservación de sus osos*», (Fundación Oso Pardo, 2021) <<https://fundacionosopardo.org/incognitas-sin-resolver-en-la-muerte-de-la-osa-sarousse-y-dejacion-de-funciones-del-gobierno-de-aragon-en-la-conservacion-de-sus-osos/>> Acceso el 20-4-24.

HOELZEL, Rus. «*Genomics of post-bottleneck recovery in the northern elephant seal*», (University of Durham U.K., 2024) <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38383849/>> Acceso el 24-2-2024.

LA COMARCA, Iulia MARINESCU, «*Matan a tiros en Alcorisa un ibis calvo, ave en grave peligro de extinción*», (La Comarca, 2024) <<https://www.lacomarca.net/matan-tiros-alcorisa-ibis-calvo-ave-grave-peligro-extincion/>> Acceso el 11-04-24.

LA VOZ DE GALICIA, Marcos MINGUEZ, «*El Código Penal establecerá como delito el furtivismo en el marisqueo*», (La Voz de Galicia, 2015) <<https://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/somosmar/2015/02/23/codigo-penal-establecera-delito-furtivismo-marisqueo/00031424704623241344543.htm>> Acceso el 15-03-2024.

LIFE INVAS AQUA, «*Castilla y León permitirá once artes de pesca para reducir el siluro en Burgos y Soria*», (2019) <<https://lifeinvasaqua.com/siluro-castilla-leon/>> Acceso el 9-2-2024.

NATIONAL GEOGRAPHIC, Dina FINE MARRÓN, «*Al rescate de la totoaba, el pez con la vejiga más valiosa del mundo*», (National Geographic, 2022). <<https://www.nationalgeographic.es/animales/2022/09/al-rescate-de-la-totoaba-el-pez-con-la-vejiga-mas-valiosa-del-mundo>> Acceso 7-2-2024.

PODER JUDICIAL, «*El Tribunal Supremo establece que la caza en tiempo de veda es delito al poner en peligro la biodiversidad*», (Poder Judicial, 2020) <<https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-establece-que-la-caza-en-tiempo-de-veda-es-delito-al-poner-en-peligro-la-biodiversidad>> Acceso el 28-4-24.

UICN. Escala de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) Organización Internacional <<https://www.iucn.org/es>> Acceso el 12-2-24.

UNIV. DE NAVARRA, «*Tentativa, consumación y agotamiento del delito*», (v-4-2017), núm. 41, (2017) <<https://www.unav.edu/web/delictum/lecciones/notas-tecnicas>> Acceso 10-05-24.